



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020)

| | |
|--------------------------|---|
| Medio de control: | Nulidad y restablecimiento del derecho |
| Radicado: | 15001 33 33 004 2019 00202 00 |
| Demandantes: | José del Carmen Chaparro Fonseca |
| Demandado: | Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio |

I. ASUNTO

El proceso ingresa al Despacho para efecto de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA. Sin embargo, por aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020 se adoptarán las decisiones del caso.

II. ANTECEDENTES

Mediante auto de 19 de noviembre de 2019, el Despacho admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor José del Carmen Chaparro Fonseca frente a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. A su turno, la entidad demandada dio contestación, a través de memorial radicado el 5 de mayo de 2020, y formuló las excepciones que denominó *“no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, “el término señalado como sanción moratoria a cargo del FOMAG es menor al que señala la parte demandante”, “culpa exclusiva de un tercero aplicación Ley 1955 de 2019”, “de la ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad fiduciaria”, “prescripción”, “de la improcedencia de la indexación y/o actualización monetaria de la sanción moratoria”, “improcedencia de condena en costas”, “condena con cargo a títulos de tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público” y “genérica”.*

Ahora bien, durante el curso de esta actuación, a través de la Resolución N° 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos, y el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los Acuerdos: PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 de 2020, suspendió los términos judiciales entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020. Es decir, que el levantamiento de la suspensión de términos judiciales operó a partir del día 1.º de julio de 2020, mediante la adopción de medidas pertinentes para la reanudación de la atención al público, el normal funcionamiento de los despachos judiciales y de otras medidas de salubridad pública y fuerza mayor.

Por su parte, a través del Decreto Legislativo N° 806 de 04 de junio 2020, el Gobierno Nacional adoptó unas medidas de orden procesal para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Por último, una vez dispuesto el levantamiento de la suspensión de términos judiciales, el traslado de las excepciones se corrió conforme lo dispone el parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA, entre el 16 y 18 de septiembre de 2020, oportunidad dentro de la cual la parte actora recorrió el traslado de las mismas.

III. CONSIDERACIONES

En esta fase procesal, con sujeción al principio general de aplicación inmediata de las leyes procesales¹, el presente asunto debe tramitarse al tenor de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020², que dispone la resolución de las excepciones previas y mixtas, según la regulación de los artículos 100, 101 y 102 del CPG. En consecuencia, el Despacho deberá resolver antes de la audiencia inicial las excepciones previas contenidas en el artículo 100 del CGP³ y aquellas mixtas consagradas en el numeral 6.º del artículo 180 de CPACA⁴, cuando no requieran la práctica de pruebas.

En el caso bajo estudio, los medios exceptivos denominados *“el término señalado como sanción moratoria a cargo del FOMAG es menor al que señala la parte demandante”, “culpa exclusiva de un tercero aplicación Ley 1955 de 2019”, “de la ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad fiduciaria”, “de la improcedencia de la indexación y/o actualización monetaria de la sanción moratoria”, “improcedencia de condena en costas” y “condena con cargo a títulos de tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”* son argumentos encaminados a discutir el fondo del

¹ Código General del Proceso. Artículo 624. *Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:*

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

² Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

³ “1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.”

⁴ “cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”

asunto y el derecho perseguido por la parte demandante, razón por la cual habrán de abordarse al momento de proferir la decisión de primera instancia, que resuelva las pretensiones de la demanda.

Puntualizado lo anterior, el Despacho pasa a pronunciarse en el siguiente orden:

a. De las excepciones previas y mixtas

La demanda fue contestada en término por parte de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que formuló las siguientes excepciones:

- No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios

Al respecto, la apoderada de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio señaló que, en ningún momento, el demandante solicitó la vinculación de la Secretaría de Educación, entidad que profirió el acto administrativo de reconocimiento de cesantía, por lo que se configuraba una indebida conformación del contradictorio. A su vez, la parte demandante sostuvo que la entidad territorial solo efectuaba una actividad administrativa bajo la tutela del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad encargada del pago de las prestaciones sociales y obligaciones a favor del personal docente. Además, recalcó que la Secretaría de Educación de la entidad territorial actuaba en nombre y representación del FOMAG, por mandato de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005.

Pues bien, para efecto de resolver esta excepción, recordemos que la figura del litisconsorcio necesario está regulada por el artículo 61 del CGP⁵, norma de la que se desprenden dos presupuestos: a) Que la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todas las personas sujetos de la relación o acto jurídico y b) Que el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto a los cuales por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de todas aquellas personas. En este entendido, en la figura del litisconsorcio existe una unidad inescindible respecto al derecho sustancial en debate.

Ahora bien, en el proceso de la referencia, aunque puede advertirse que la Secretaría de Educación de Boyacá es responsable de la administración del personal docente y encargada de resolver la reclamación elevada por la parte demandante, lo cierto es que dicha entidad actúa simplemente como consecuencia de la delegación efectuada por las Leyes 91 de 1989 (artículo 9.º) y 962 de 2005 (artículo 56), a través del procedimiento previsto en el Decreto 2831 de 2005. Luego, no se establece la existencia de relaciones sustanciales, que ligen al ente territorial con la entidad demandada. En consecuencia, para el Despacho no son de recibo los argumentos que sustentan la mencionada excepción, habida cuenta de que el reconocimiento del auxilio de cesantía, cuya sanción moratoria por pago tardío se reclama, proviene de la Nación – Ministerio de Educación y, en ese orden, la excepción no está llamada a prosperar.

⁵ “ART. 61.- Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas y dirigirse contra todas...(…)”

- Prescripción

Sobre el particular, la entidad demandada expresó que si bien el reconocimiento de la sanción moratoria está vinculada a las cesantías que se deben pagar al empleado público, dichos derechos se causan de forma independiente, y la sanción moratoria hace parte del derecho sancionador, que es prescriptible y a la que se le aplica el término de prescripción de tres (3) años, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

En lo concerniente a este medio exceptivo, en providencia de 9 de abril de 2014⁶, el Consejo de Estado señaló que la excepción prescriptiva de derechos debe ser resuelta en la sentencia, toda vez que dada su naturaleza mixta puede enfocarse en atacar el derecho sustancial y no el ejercicio de la acción, motivo que resulta suficiente para que esta sea analizada en caso de que prosperen las pretensiones de la demanda, es decir, si analizado el fondo del asunto se llega a una sentencia estimatoria.

b. Del decreto de pruebas

El artículo 13 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 establece la posibilidad de dictar sentencia anticipada cuando se trate de asuntos de puro derecho o que no fuere necesario practicar pruebas, *“caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito”*.

Por tanto, corresponde al Despacho decidir sobre el decreto de las pruebas solicitadas y aportadas por las partes en la demanda y sus contestaciones, en los siguientes términos:

1. Parte demandante

Pruebas aportadas: Con el valor probatorio que les confiere la Ley, téngase como pruebas documentales las aportadas con la demanda, visibles a folios 19 a 29 del expediente, las cuales consisten en:

- Cédula de ciudadanía del demandante.
- Resolución N° 008123 de 17 de noviembre de 2016, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial a favor del demandante.
- Certificación expedida por la Fiduprevisora S.A. sobre la fecha en que los dineros por concepto de cesantías fueron puestos a disposición del demandante.
- Constancia de radicación de 17 de mayo de 2018 de la solicitud tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
- Petición para el pago de la sanción moratoria.

Pruebas solicitadas: Esta Judicatura negará las pruebas solicitadas, consistentes en oficiar a la entidad demandada a efecto de que remita el certificado de salarios y devengados del demandante, así como el certificado de tiempo de servicios, al considerar que no resultan pertinentes, conducentes y útiles para dilucidar el objeto de

⁶ Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 27001-23-33-000-2013-00347-01(0539-14).

controversia de este medio de control, esto es, definir el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales prevista en la Ley 1071 de 2006. Además, debe tenerse en cuenta que con la demanda se aportaron los documentos necesarios para proferir una decisión de fondo, tales como el acto administrativo que ordenó el reconocimiento del auxilio de cesantía, la constancia de radicación de la reclamación elevada ante la Administración y la certificación de la fecha en que los dineros por concepto de cesantías fueron puestos a disposición del demandante.

2. Parte demandada

Pruebas aportadas: Con el valor probatorio que les confiere la Ley, téngase como prueba documental la aportada con la contestación de la demanda, visible en la hoja 21 del archivo denominado “Contestación demanda 2019-0202”, expediente que obra en el estante digital del Juzgado, la cual consiste en:

- Certificación expedida por la Fiduprevisora S.A. sobre la fecha en que los dineros por concepto de cesantías fueron puestos a disposición del demandante.

Pruebas solicitadas: el Despacho se abstendrá de solicitar ante la Fiduprevisora S.A. la información relacionada en la contestación de la demanda, a efectos de que certifique si se ha efectuado algún desembolso de dinero por concepto de sanción moratoria, al evidenciarse que con la demanda se aportó constancia de la Fiduprevisora en la que certificó la fecha de pago, y que con los demás documentos allegados es posible proferir una decisión de fondo.

c. Aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020, las partes y demás sujetos procesales deberán realizar todas las actuaciones a través de medios tecnológicos, y enviar un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o actuaciones que realicen a todos los extremos procesales, **simultáneamente** con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales que a continuación se señalan, según la información que reposa en el proceso:

| | |
|---|--|
| Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja | correspondenciajadmtn@cendoj.ramajudicial.gov.co |
| Ministerio Público | procjudadm177@procuraduria.gov.co |
| Parte demandante | camila.valencia@lopezquintero.co |
| Parte demandada | notificacionesjudiciales@mineducacion.edu.co ; notjudicial@fiduprevisora.com.co ; t_ialvarado@fiduprevisora.com.co |

Finalmente, al reunir los requisitos de que trata el artículo 74 y ss. del CGP, se reconocerá personería a las abogadas Laura Marcela López Quintero y Camila Andrea Valencia Borda, para actuar como apoderadas de la parte demandante, en los términos y para los efectos conferidos en el memorial poder allegado al expediente. Sin embargo, en ningún caso podrán actuar de manera simultánea.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Tener por contestada la demanda por parte de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

SEGUNDO.- Declarar no probada la excepción denominada “*No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios*” propuesta por la entidad demandada, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Diferir al momento de la sentencia, las excepciones denominadas “*el término señalado como sanción moratoria a cargo del FOMAG es menor al que señala la parte demandante*”, “*culpa exclusiva de un tercero aplicación Ley 1955 de 2019*”, “*de la ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad fiduciaria*”, “*prescripción*”, “*de la improcedencia de la indexación y/o actualización monetaria de la sanción moratoria*”, “*improcedencia de condena en costas*”, y “*condena con cargo a títulos de tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público*”, presentadas por la entidad demandada.

CUARTO.- Incorporar con el valor legal que corresponda los documentos aportados con la demanda y su contestación.

QUINTO.- Advertir a las partes y demás sujetos procesales que, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, deberán enviar un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o actuaciones que realicen, **simultáneamente** con copia incorporada al mensaje enviado al Despacho, a través de los canales digitales reseñados en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO.- Reconocer personería a las abogadas Laura Marcela López Quintero, identificada con C.C. N° 41.960.717 y T.P. N° 165395 del C.S.J. y Camila Andrea Valencia Borda, identificada con C.C. N° 1.049.648.247 y T.P. N° 330819 del C.S.J., para actuar como apoderadas judiciales de la parte demandante, de conformidad con el memorial poder allegado al expediente. Sin embargo, en ningún caso podrán actuar de forma simultánea.

SÉPTIMO.- Tener por terminado el poder conferido por el señor José del Carmen Chaparro Fonseca a la abogada Diana Nohemy Riaño Flórez, en los términos del artículo 76 del CGP, como consecuencia de la designación de nuevos apoderados.

OCTAVO.- Reconocer personería al abogado Luis Alfredo Sanabria Ríos, identificado con C.C. N° 80.211.391 y T.P. N° 250292 del C.S.J., para actuar como apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con la escritura pública obrante en el expediente.

NOVENO.- Reconocer personería a la abogada Iber Esperanza Alvarado González, identificada con C.C. N° 1.049.641.483 y T.P. N° 305017 del C.S. de la J., en calidad de apoderada sustituta de la demandada Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos y para los efectos

conferidos en el memorial poder de sustitución obrante en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del CGP.

DÉCIMO.- Una vez en firme la presente decisión, el asunto pasará al Despacho para disponer el trámite procesal que legalmente corresponda.

Notifíquese⁷ y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

5ba86c4c05b691ba90dc1b7f05e9c2a057f6ca2fc338ca647ee2febbdd773eee

Documento generado en 02/10/2020 04:40:41 p.m.

7

Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La anterior providencia se notifica por
estado electrónico N.º 30
de hoy 5 de octubre de 2020, a las 8:00 a. m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario